

La humillación permanente

Juan Antonio Madrazo

Coordinador Nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)
La Habana, Cuba

La Cuba posmoderna es una sociedad estratificada racialmente. Para muchos observadores y estudiosos continúa siendo una comunidad secularmente racista, marcada por el trauma de la esclavitud, porque las heridas provocadas son aún visibles en el cuerpo íntimo social.

Racismo, discriminación y prejuicios son dispositivos ideológicos coloniales, que prosiguen operando orgánicamente bajo el manto de la impunidad, lastimando la dignidad humana, ya que no se han atacado sus bases logísticas. Son heridas de las cuales la sociedad no se ha logrado recuperar, y constituyen un peligroso combustible que amenaza la integración de nuestra ecología social.

Es uno de los tejidos más dañados y se impone como roca firme, dispuesta a resistir ante la ausencia de pedagogía antirracista. Ambos fenómenos son ejercicios de poder hegemónico que aún levantan barreras internas, cómodamente instaladas en la macroconciencia social, patologías con personalidad propias que forman parte de la historia clínica de la nación.

A la par del discurso del odio se legitima la discriminación por el color de la piel. Hay patrones de impunidad y ambiente de apoyo que lo naturalizan. La ideología del color es una máscara social y política, que todavía impone su hegemonía. Es unos de los espejos

de la violencia que sigue fermentando internamente el cuerpo social, asumiendo nuevos rostros proteicos, sobreviviendo contra viento y marea.

Tras el movimiento sísmico de 1959 y el desmantelamiento de una sociedad civil de arquitectura racista, actores políticos y sociales interpretaron la llegada de un nuevo orden como el ascenso social de los afrodescendientes y la oportunidad para abolición del racismo. Líderes de opinión, intelectuales, políticos y sindicalistas pensaron que Cuba había llegado a un proceso de emancipación de la dignidad humana, a un verdadero proceso de integración.

Durante los primeros años se organizaron foros, campañas de instituciones profesionales, estudiantiles, políticas, religiosas y sindicales. Sobrevinieron bailes interraciales y banquetes de fraternidad; periodistas y escritores publicaron artículos sobre la temática. Hubo una integración gradual de establecimientos públicos y recreativos.

En la Segunda Declaración de La Habana (febrero, 1962) se postuló que la revolución, bajo la dictadura del proletariado, había erradicado la discriminación por motivos de raza o sexo. Así se reprodujo en documentos oficiales, en la prensa e incluso en los centros de enseñanza. Para el mundo la discriminación fue abolida en 1962.

Los intelectuales afrocubanos que durante la república denunciaban las limitaciones de la democracia racial perdieron sus principales bases de apoyo institucional. En los clubes, asociaciones y en la prensa, el llamado programa de integración que proponía la revolución dejó poco espacio para que persistieran voces e instituciones racialmente definidas.

El silencio sobre el discurso de naturaleza étnica fue condenado a la conspiración precisamente del silencio, todo subordinado a mezquinos intereses. Las religiones de origen africano no eran apreciadas por la ortodoxia oficial como formas culturales, sino como obstáculos en la construcción del socialismo tropical y en la formación del «hombre nuevo».

El espejismo de la igualdad se aceptó como hecho consumado y la problemática se convirtió en trinchera abandonada en la agenda doméstica, no así en su cruzada por la búsqueda de aliados en la arena internacional, donde cínicamente las autoridades apoyaban la lucha de los afroamericanos. La lucha anticolonialista en África y la política exterior se convirtieron en dispositivo de seducción de los movimientos populistas y se emplearon para desviar la mirada de los problemas raciales internos.

El discurso autónomo encontró resistencia oficial por los comisarios de turno; intelectuales y sindicalistas que trataban de incentivar el debate sobre la problemática racial fueron reprimidos ideológicamente: unos condenados al ostracismo y otros al destierro o a la muerte civil. Se desarrollaron operaciones de marginación y exclusión. La parametración del investigador Walterio Carbonell, del dramaturgo Tomás González, de Eugenio Hernández Espinosa y, en menor medida, de la cineasta Sara Gómez, fueron hechos concretos. Muchos documentales de Gómez continúan silenciados.

También fueron víctimas Juan René Betancourt y Carlos Moore, y la generación de El Puente, grupo literario que fue considerado como el renacer de una especie de *black power*. Todos, bajo la lupa de la policía política, fueron acusados de amenazar la unidad nacional y de intentar provocar el colapso del sistema.

A 50 años de un movimiento sísmico que nos confiscó el futuro y nos cambió la vida a todos, la sociedad no goza de la emancipación real de su población negra y mestiza, que todavía es rehén de la desventaja social y la incertidumbre. Una parte nada despreciable continúa anclada en los campos de concentración de la extrema pobreza y confinada a la escala más baja de la pirámide social.

Muchos afrodescendientes consideran a Cuba un país inhabitable e inseguro, en el cual no se sienten cómodos, pues el color de la piel y el látigo de la discriminación los condena. Se sienten sujetos con una ciudadanía mutilada y como grupo poblacional en riesgo, impactado por la arbitrariedad, la intolerancia y la violencia.

Negros y mestizos son objeto de todas las deformaciones en el imaginario de la sociedad históricamente racializada. Su palabra continúa siendo tenida por licenciosa y maldita; sus prácticas corporales, religiosas y sexuales, como profanadoras y enemigas de la racionalidad. El dolor histórico de la discriminación se sigue sufriendo, y afecta a toda la sociedad. Es una humillación permanente, que debe ser desmantelada para lograr la integración de nuestra socio-diversidad. Para ello hay que mirar de frente al racismo, en lugar de subordinarlo a plataformas oportunistas diseñadas por los aparatos ideológicos. Y esto exige tomar una determinación ética y política para emplazarlo públicamente.